



*Procuraduría General de la República
Honduras*

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 1 de 19

**SE PRESENTAN ALEGATOS FINALES ESCRITOS EN EL CASO
TRAMITADO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS. - CASO No.12.585 ANGEL PACHECO LEON
Y FAMILIA VS HONDURAS.**

**Distinguido Doctor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario Ejecutivo
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
San José Costa Rica**

Señor Secretario Ejecutivo:

Ricardo Lara Watson, actuando en mi condición de Sub Procurador General de la República y Agente del Estado de Honduras, comparezco presentando los Alegatos Finales Escritos, conforme a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente al Caso “Ángel Pacheco León y Familia” sometido a la jurisdicción de este Alto Tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 18 de marzo de 2016, por la presunta violación del Estado de Honduras de los derechos a la vida, la integridad personal, a las garantías judiciales, los políticos y a la protección judicial, consagrados en los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Ángel Pacheco León, Blanca Rosa Herrera Rodríguez, Cinthia Mirella, Miguel Ángel, Jimmy Javier, Tania Melissa, Juan Carlos, Bianca Giselle, Andrea, Maria Otilia, Concepción, Blanca Nubia, José, María Regina, Francisco, Santos Norma, Marleny, Yamileth Almendarez, Jackeline Almendarez, y Jorge Alberto Almendarez, todos de apellido Pacheco.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 2 de 19

I.-Antecedentes.

El 27 de agosto de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), recibió una denuncia de la Señora Marlene Pacheco Posadas, alegando responsabilidad internacional del Estado de Honduras, por la falta de investigación, procesamiento y sanción de las personas responsables, materiales e intelectuales del asesinato de Ángel Pacheco León, ocurrido el 23 de noviembre de 2001.

Los peticionarios alegan que el Estado violentó los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5.1 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 23 (Derechos Políticos) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1; y, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2, ambos del mismo instrumento internacional.

La Comisión concluyó, en su Informe de Fondo 49/15 Caso 12.585 que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, políticos y a la protección judicial, consagrados en los artículos 4, 5.1, 8, 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las presuntas víctimas. Habiendo sometido el caso ante la Corte IDH en fecha 18 de marzo de 2016.

En fecha cinco de julio del 2016, el Estado de Honduras, tomando en consideración el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana, el escrito de sometimiento ante la jurisdicción de esa Honorable Corte Interamericana, y el de solicitudes, argumentos y pruebas (ESAP) de las presuntas víctimas o sus representantes, cumplió con su obligación de contestar la demanda. En este acto se reafirma lo manifestado en nuestra respuesta, concerniente básicamente a los derechos que presuntamente fueron violados en perjuicio de los peticionarios y se presentan los alegatos por escrito de acuerdo a lo dispuesto en el





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 3 de 19

artículo 56 del Reglamento de la Corte IDH. El Estado de Honduras reitera, nuevamente el compromiso adoptado de respetar y garantizar los derechos individuales de las personas.

II.-En lo referente al Derecho a la Vida (Artículo 4 de la Convención Americana).

El señor Ángel Pacheco León, perdió su vida el 23 de noviembre de 2001, tras sufrir un atentado con armas de fuego por parte de una persona desconocida. El Estado de Honduras, ha sostenido que no puede ser responsabilizado de tan lamentable hecho, pues, en ningún momento incumplió su obligación de prevenir la muerte del señor Pacheco León, en virtud que no existió ninguna denuncia previa, interpuesta ante un órgano estatal competente, en la que él hubiese puesto en conocimiento las amenazas recibidas.

Al respecto, la Comisión ha reconocido¹ que *“no consta en el expediente denuncia ante autoridades estatales de amenazas recibidas, de una situación de riesgo o de la necesidad de contar con medidas de protección a favor del señor Pacheco León”*. De esta forma, la Comisión consideró que en el presente caso *“no puede afirmarse la existencia de un riesgo que el Estado sabía o debía saber respecto de Ángel Pacheco”*, concluyendo, que no se cuenta con elementos suficientes para atribuir responsabilidad al Estado por incumplimiento del deber de prevención. Precisamente, ha quedado terminantemente probado en la audiencia de juicio realizada en el presente caso, con las mismas declaraciones testimoniales² propuestas por los representantes de los peticionarios, que el señor Pacheco León, antes de su muerte, nunca denunció haber recibido amenazas.

¹ Véase. Informe de Fondo 49/15 Caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia vs, Honduras párrafo 131.

² El testigo José Pacheco, manifiesto en la audiencia de juicio al ser interrogado por la representación del Estado, y los honorables jueces de la Corte, que no tiene *“conocimiento que su hermano haya denunciado las amenazas recibidas”*. Declaración de la cual se deduce en consecuencia con claridad que el señor Ángel Pacheco león nunca presentó denuncias de las amenazas que pudo haber recibido, pues de haber sido así su hermano se habría dado cuenta.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 4 de 19

En relación a la supuesta participación de dirigentes políticos, como posibles responsables intelectuales de la muerte del señor Pacheco León, no obstante, de haberse realizado investigaciones, no existen indicios suficientes que indiquen con inferencia racional esa participación, la cual se aduce motivada por diferencias de orden político con la víctima, dadas las controversias surgidas por las aspiraciones de éste, para convertirse en Diputado por el Departamento de Valle. Diferencias que, en ningún momento se acreditaron por los peticionarios fuesen más allá de las supuestas controversias de índole político que se dan en los procesos electorales, que incluso de haber existido, tendrían que entenderse como controversias de tipo político partidarias en los intereses personales de los supuestos agentes oficiales y del señor Pacheco León. Diferencias políticas, que además, no pueden atribuirse en condición de agentes del Estado, pues los mismos no habrían sido un medio necesario para la ejecución del hecho de dar muerte a la víctima, de haber sido éstos los responsables, extremo del cual no existen elementos probatorios que permitiesen llegar a su verificación, ni se acreditaron en el caso *sub judice* de manera fehaciente en la audiencia de juicio.

En consecuencia, el Estado considera que no existen elementos que puedan atribuir la responsabilidad que los peticionarios alegaron con *posterioridad* al Informe de Admisibilidad, aduciendo que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida, establecido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Ángel Pacheco León.

II.-En lo referente al Derecho a la Integridad Personal (Artículo 5.1 de la Convención Americana).

El Estado ha sostenido que no se le puede responsabilizar de violación al artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los familiares de la víctima, pues si bien se puede reconocer que han surgido dificultades que han demorado el proceso de investigación, no se puede aceptar, que esto haya generado las supuestas





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 5 de 19

violaciones a sus familiares, debido a que no existe prueba alguna de que hayan surgido amenazas o que estas fueran denunciadas por los familiares de la víctima.

Si bien se trata de un hecho grave que terminó con la vida del señor Pacheco León; se considera que no se puede responsabilizar al Estado de las afectaciones psíquicas y morales de sus familiares, pues no se pudo establecer que ellos estaban siendo amenazados por terceras personas. Es importante mencionar que al momento de los hechos, se encontraba en vigencia un Código de Procedimientos Penales basado en el modelo escrito de índole inquisitivo, totalmente diferente al que rige actualmente en el país y vigente desde el año 2002, que implemento un proceso de corte acusatorio y caracterizado por ser oral y público, garantizando así los principios de: concentración inmediación y celeridad.

En relación al mismo derecho, el Estado ha sostenido que, no todos los familiares que petitionaron ante la CIDH, se encontraban en el *círculo íntimo* del señor Pacheco León, por lo cual el daño inmaterial que podrían haber sufrido algunos de sus hermanos no se puede asemejar al sufrido por otros como ser sus hijos o su madre, pues de acuerdo a lo establecido por la Corte, el sufrimiento ocasionado a la víctima *“se extiende a los miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima”*.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte IDH, en los casos **Bámaca Velásquez vs. Guatemala** y **Gutiérrez y familia Vs. Argentina** ha establecido los criterios a tomar en cuenta para definir la cercanía de los familiares a fin de determinar si existe una violación a la integridad psíquica y moral de estos, como ser:

- La proximidad del vínculo familiar;
- Las circunstancias particulares de la relación con la víctima;
- El grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición o muerte;





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 6 de 19

- La forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición o muerte de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.

Así, en esa línea de razonamiento, en los *Casos Bueno Alves vs. Argentina y Veliz Franco y Otros vs. Guatemala*, la Corte IDH consideró que solamente se excluyeron por completo de las reparaciones a hermanos, nietos, *inter alia*. En vista de lo anterior, el Tribunal consideró que únicamente los integrantes del núcleo familiar más íntimo de las víctimas, es decir, los padres, parejas e hijos, fueron considerados víctimas de la violación del artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por el perjuicio emocional y moral que padecieron.

Los representantes han manifestado que dentro de las medidas indispensables de reparación encaminadas a disminuir el daño sufrido por las violaciones de derechos humanos en perjuicio de las víctimas en el presente caso, se encuentra la indemnización compensatoria por daño material e inmaterial³. Ciertamente, cuando es procedente el Estado no está exento de la aplicación de aquellas medidas que buscan compensar los daños sufridos por los familiares (*íntimamente cercanos de la víctima*), conforme al principio de equidad. Sin embargo, es importante, determinar el alcance y los términos de las medidas de reparación. Porque si bien las reparaciones a violaciones a derechos humanos deben ser integrales, esto no conlleva a que se deba dar una excesiva reparación por cada violación, tomando en consideración que la misma siempre ostentará carácter compensatorio y no sancionatorio.

Precisamente la Honorable Corte, podrá constatar que de los alegatos de los peticionarios, únicamente se aduce un mayor interés y participación dentro del procedimiento en relación a algunos de sus familiares (hermanos), tal es el caso de don José Pacheco, quien reemplazó



³ Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas 18 de marzo de 2016 COFADEH (ESAP).





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 7 de 19

a su hermano en la postulación como diputado en el Honorable Congreso Nacional y ha sido el principal impulsor de las acciones por parte de la familia Pacheco en el presente caso, tal como se deduce de la declaración rendida por la señora Blanca Rosa Herrera Rodríguez, por affidavit; además de doña Marleny Pacheco, quien han participado en otras diligencias del caso.

Esta Honorable Corte ha sostenido que se presume *iure et de iure* que la muerte de la víctima ha generado perjuicio a sus derechohabientes, sin embargo, no rige la misma presunción en el caso de los meros dependientes. En estos casos se debe probar el perjuicio, acreditando la efectividad de la prestación que hacia la victima a quienes alegan la relación de dependencia. Para el caso de la gran mayoría de los hermanos del señor Pacheco León, en el ESAP únicamente se hace mención que la víctima representaba un apoyo económico para ellos, sin detallar el mismo y, sin acreditarse, el grado de dependencia de ellos hacia él.

De igual manera, esta Honorable Corte debe considerar que estos no se ajustan a los parámetros jurisprudenciales para considerarlos víctimas *íntimamente cercanos*, como lo es el caso de los miembros de su núcleo familiar (madre, esposa e hijos). Lo anterior en virtud de que los representantes en su ESAP y en la audiencia, no lograron acreditar la participación de ellos en la búsqueda de la verdad en el caso de su hermano, ni las circunstancias particulares de la relación con la víctima.

Cabe mencionar, que algunos de sus hermanos, residían en Estados Unidos, y los representantes únicamente se refieren a que estos lamentaban el hecho de que no pudieron asistir a los actos fúnebres de su hermano, sin describir actuaciones posteriores en el interés de participar en las investigaciones o llevar el presente caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o el apoyo brindado a sus sobrinos. En las declaraciones de las señoras Andrea Pacheco y Blanca Herrera, se habla de la cercanía que tenía el núcleo familiar del señor Pacheco León.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 8 de 19

III.-En lo referente a los derechos políticos (Artículo 23 de la Convención Americana).

En cuanto a las argumentaciones formuladas tanto por la Comisión⁴, como por los peticionarios, argumentando que debido a las supuestas presiones que fue objeto el señor Ángel Pacheco León, la falta de diligencias y a las múltiples amenazas e irregularidades en las investigaciones, son las razones por las cuales se presume la responsabilidad internacional del Estado.

En tal sentido lo sostenido por la Comisión y los representantes, no es congruente con la amplia jurisprudencia de la Corte IDH, en tanto, los hechos del caso "*Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia*" utilizado como precedente por los representantes, son diferentes a los del caso que nos ocupa, ya que, en el caso referido, el señor Manuel Cepeda Vargas fungía como diputado al momento de su fallecimiento, razón por la cual la Corte IDH consideró violado el artículo 23 de la CADH en su perjuicio.

A *contrario sensu* en el caso *sub judice* al momento de su lamentable deceso el señor Ángel Pacheco León no fungía como diputado, por ende, resultaría improcedente de acuerdo a la jurisprudencia de este Honorable Tribunal declarar lesionado el artículo 23 de la CADH como sostienen los peticionarios.

EL Estado pide se considere, que la Corte IDH ha interpretado los derechos políticos en los casos "*Chitay Nech y otros vs. Guatemala*" y "*Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia*", pero ambos casos tratan de desapariciones forzadas bajo un patrón sistemático de violencia en contra de miembros de partidos políticos, aspectos totalmente diferentes al caso *sub judice*, resultando por tanto inaplicables los referidos precedentes.

⁴ Informe No. de Fondo 49/15 caso 12.585 Ángel Pacheco León y Familia Honduras párrafo. 144-146.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 9 de 19

Tampoco se puede utilizar el caso *“Yatama vs. Nicaragua”* como lo ha hecho la Comisión en su informe de fondo, aun siendo el *leading case* en la materia, pues resulta improcedente, aunque ambos casos abordan los derechos políticos, su plataforma fáctica es totalmente diferente. Por tanto, considerar el caso *“Yatama vs. Nicaragua”* o el caso *“López Mendoza vs. Venezuela”* como un antecedente jurisprudencial válido, para declarar la responsabilidad internacional del Estado de Honduras, resulta a criterio de esta representación injustificado, ya que, a diferencia de los casos referidos, consta en el expediente del Estado que al señor Ángel Pacheco León si se le permitió su inscripción y participación como candidato a diputado del Congreso Nacional de la República. Asimismo, luego de su trágica muerte, su hermano **José Pacheco** fue inscrito en su lugar ante el respectivo órgano electoral a solicitud de la directiva central del Partido Nacional, y se le declaró electo, demostrándose así, que se respetó la voluntad de sus votantes, lo cual demuestra con certeza absoluta que el Estado de Honduras no violó el artículo 23 en su numeral 1 literal a).

A *contrario sensu* Honorable Corte IDH, el Estado de Honduras considera que el antecedente jurisprudencial aplicable en lo que respecta a los derechos políticos es el caso *“Escué Zapata vs. Colombia”*, pues sus hechos se ajustan en mayor medida a los del caso *sub judice*. En virtud que al momento de la muerte de los señores Escué Zapata y Ángel Pacheco no eran todavía autoridad política. En consecuencia, es procedente mantener la línea jurisprudencial, y retomar así como lo ha hecho en múltiples ocasiones en los casos *“Bamaca Velásquez vs. Guatemala”*, *“La Cantuta vs. Perú”* y *“Escue Zapata vs. Colombia”* y declarar no violado el artículo 23 de la CADH.



En consecuencia, los alegatos esgrimidos tanto por la Comisión y las presuntas víctimas pierden validez con la muerte del señor Ángel Pacheco León ya que se hace en palabras de la Corte IDH *“improcedente”* alegar la violación a este derecho, pues él nunca actuó como





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 10 de 19

diputado y menos aún se cometieron arbitrariedades de ningún tipo al momento de su inscripción por autoridades estatales.

Es oportuno señalar, que de conformidad a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente al momento de los hechos, se establecía en el artículo 63 lo siguiente: "*Si falleciere o renunciara un candidato inscrito antes de practicarse la elección para la cual ha sido postulado, la organización política de que se trate, tendrá la obligación y el derecho de registrar un nuevo candidato mediante decreto de su directiva central*"⁵. Por tanto, es notorio, que si hubiese existido un interés del partido político al cual pertenecía el señor Ángel Pacheco León de favorecer a otra persona en particular, no se hubiese inscrito en su lugar a su hermano José Pacheco,⁶ como efectivamente sucedió.

El mismo perito propuesto por el COFADEH, Rodil Rivera Rodil, también reiteró de manera categórica al contestar las preguntas hechas por la representación del Estado, que de acuerdo a la ley vigente le correspondía a la directiva central en este caso del Partido Nacional proponer un nuevo candidato para sustituir al señor Ángel Pacheco León. Es evidente que se procedió a la inscripción de su hermano José Pacheco, sin haber existido en ningún momento la pretensión de querer inscribir otro candidato, éste hecho pone en evidencia que nunca existió la supuesta conspiración de orden político para dar muerte al

⁵ Véase. Anexo 1. Artículo 63 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Ley vigente al momento del hecho). En la actualidad la ley vigente establece en el Artículo 138 lo siguiente: "FALLECIMIENTO O RENUNCIA O CAUSA DE INHABILIDAD DE UN CANDIDATO. Si falleciera, renunciara o sobreviniere cualquier causa de inhabilidad a un candidato inscrito, antes de practicarse la elección para la cual ha sido postulado, la organización política de que se trate, tendrá la obligación y el derecho de registrar un nuevo candidato mediante su Autoridad Central. Celebradas las elecciones primarias los candidatos propietarios serán sustituidos por sus respectivos suplentes". Siendo claro que con la Ley que regía al momento del hecho los partidos políticos tenían una absoluta discrecionalidad para realizar sustituciones por causa de muerte.

⁶ No obstante, que el señor José Pacheco "*no conocía de política y no estaba preparado*", como el mismo manifestó en su declaración rendida en la audiencia de juicio.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 11 de 19

señor Pacheco León, pues de haber sido de esta manera y como lo han pretendido hacer ver la Comisión y los representantes de los peticionarios, se hubiese procedido entonces a pedir la inscripción de cualquier persona que se hubiera querido favorecer y lo cual se podía hacer además de acuerdo a la normativa electoral vigente en ese momento, resultando claro de acuerdo al sentido común, que la estructura política a la cual pertenecía el señor Pacheco León, nunca pretendió beneficiar a ninguna persona en particular, quedando en evidencia, que no existió ninguna confabulación para darle muerte ni se trató de un crimen selectivo por razones políticas por incomodar a las referidas estructuras políticas de poder como erróneamente sostiene la Comisión, pues de haber sido así, reiteramos, esa estructura política no habría pedido la inscripción como candidato a diputado del señor **José Pacheco**, hermano de **Ángel Pacheco León**, habría pedido y sin ningún inconveniente legal el de otra persona.

Es importante mencionar que en el país desde el año 1981 han existido dos leyes electorales, la primera⁷, La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto No. 53 emitido el 20/04/1981⁸; la segunda, La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Decreto No.44-2004⁹ vigente desde el año 2004.

En relación a la participación de los órganos electorales en los proceso electorales corresponde actualmente al ente rector- Tribunal Supremo Electoral (TSE)- todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, su integración, organización y funcionamiento, así como entre otras funciones organizar, dirigir, administrar y vigilar los

⁷ Vigente al momento que ocurrió la muerte de Ángel Pacheco León.

⁸ Véase anexo 1.

⁹ Véase anexo 2.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 12 de 19

procesos electorales y consultas populares,¹⁰ de acuerdo a la anterior ley correspondía al entonces órgano rector- Tribunal Nacional de Elecciones- lo referente a la organización, convocatoria, dirección y supervisión de los procesos electorales,¹¹ específicamente, en el artículo 104 se consignaban las atribuciones que tenía el Tribunal Nacional de Elecciones, de acuerdo a la establecida en su literal m), le correspondía: *“Velar por que se respeten y reconozcan a los ciudadanos y a las organizaciones políticas legalmente constituidas, las garantías y derechos que señalan la Constitución de la República, la presente ley y las demás pertinentes con relación a sus actividades políticas y electorales”*. En ese momento, el Estado a través del órgano electoral que correspondía (Tribunal Nacional de Elecciones), garantizó efectivamente los derechos políticos del señor Ángel Pacheco León como aspirante un cargo de elección popular al ser inscrito éste sin ningún tipo de restricciones o limitaciones a su derecho de participación política.

Resulta importante señalar, que de conformidad a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente al momento de los hechos, la elección de diputados dependía del partido político que participaba en las elecciones¹². El denominado voto preferente en el cual el movimiento político puede inscribir una lista abierta de tal manera que el elector vota no solo por la organización política sino además por alguno de los candidatos de la lista presentada, se implementa con la entrada en vigencia de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas del año 2004¹³ y vigente en la actualidad. Contrario a lo argumentado erróneamente y sin verificación alguna por parte de la Comisión en sus

¹⁰ Artículos 9 y 15 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente Decreto No. 44- 2004. Anexo 2.

¹¹ Artículo 83 y 104 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente Decreto No. 53- 1981. Anexo 1.

¹² Artículos 189, 193, 194, 197 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas vigente al momento del hecho. Decreto No. 53- 1981. Anexo 1.

¹³ Decreto 44-2004 Ley electoral y de las Organizaciones Políticas artículo 122 párr. 2 y 125 literal 2.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 13 de 19

alegatos orales al momento de finalizar la audiencia pública de juicio, suponiendo que al momento que se dio la muerte del señor Ángel Pacheco León, se seguía la modalidad del voto preferente, aduciendo ello como una posible razón por la cual se le dio muerte, argumento sin sustento que no puede ser tenido en consideración por la Corte.

En el momento de los hechos los movimientos políticos y los partidos políticos tenía una mayor discrecionalidad en cuanto a las decisiones relacionadas a quienes se presentaban como candidatos, así como las sustituciones por causa de muerte como ya se ha referido supra.

El Estado considera, que las dificultades ocurridas durante la investigación o las irregularidades en la misma alegadas por la Comisión y las presuntas víctimas no son hechos que vulneren los derechos políticos como se ha establecido en los casos *“Velásquez Rodríguez vs. Honduras”*, *“Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”*, *“Castillo González y otros vs. Venezuela”* y *“Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala”*.

En razón de lo anterior, el Estado de Honduras no puede ser considerado responsable de violación a los derechos políticos en relación con la muerte del señor Pacheco León, pues como se puede constatar y el Estado reitera, en ningún momento se le limitó o se pretendió poner interferencias de ningún tipo en cuanto a su participación como candidato a cargo de elección popular habiendo sido inscrito en el órgano electoral respectivo, sin limitaciones a su acceso a dicho derecho para poder participar como candidato a diputado, hecho plenamente acreditado y que ha sido aceptado por los peticionarios.

IV.-Derecho a las Garantías Judiciales y la Protección Judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana).





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 14 de 19

El Estado reconoce que existieron dificultades en las investigaciones en el presente caso, provocando una tardanza en la búsqueda de justicia, sin embargo, consideramos importante hacer mención de algunas consideraciones en relación a los artículos 8 y 25 de la CADH.

En primer término, el órgano acusador del Estado Ministerio Público (MP), debe siempre por mandato de ley actuar en forma objetiva y responsable, en consecuencia, no puede presentar acusación contra personas o aseverar que existen “*estructuras de poder*”, involucradas por el solo hecho que se les considere que son sospechosos de haber cometido un delito, cuando no existen indicios suficientes; pues, la obligación de investigar no es la obtención de sentencias condenatorias, sino el esclarecimiento de la verdad de los hechos hasta donde es posible, utilizando las herramientas de que se dispone.

En ese sentido, el Estado de Honduras es consciente que la diligencia, exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue, y como ha señalado la Corte en el *Caso Garibaldi Vs Brasil* en relación con los casos de muerte violenta: “*Las autoridades estatales que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia:*

- 1) *Identificar a la víctima;*
- 2) *Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables;*
- 3) *Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga;*
- 4) *Determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y;*
- 5) *Distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio.”*

Todo lo anterior, ha sido realizado en el presente caso, el Estado reitera su compromiso de continuar realizando investigaciones hasta que se pueda llegar a identificar plenamente a





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 15 de 19

los responsables y los familiares obtengan el derecho a la verdad, lo cual, ha sido del conocimiento de las supuestas víctimas, particularmente del señor **Jimmy Javier Pacheco**, hijo del señor **Ángel Pacheco León** y único testigo presencial del hecho.

Como bien lo ha indicado la misma Corte, en casos como *Myrna Mack Chang vs Guatemala* y *Pacheco Teruel vs Honduras* “*el deber de investigar es una obligación de medio o comportamiento y, no de resultados*”, por lo que no se consideraría incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio aún, tal como lo señala en su jurisprudencia en sentencias como en el *Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras* o *Caso García Prieto y otros vs. El Salvador*, así como en mayor detalle quedó plasmado en el Voto Concurrente Del Juez *Ad Hoc* Diego Eduardo López Medina en la Sentencia del 5 de mayo de 2008 en el Caso *Escué Zapata Vs. Colombia*, en relación con la obligación de investigar que tienen los Estados, en la forma siguiente: “*en categorías clásicas del derecho, puede decirse que esta obligación es de medio (o de actividad, también llamada de due diligence) y no de resultado porque la imposición de condenas efectivas depende de una serie de variables sustantivas, probatorias y procesales que ningún Estado puede garantizar, ni siquiera aquellos que adelantan de buena fe y con altísima diligencia la investigación de conductas penales violatorias de los derechos humanos. La más eficaz de las maquinarias de justicia no puede, ni debe garantizar que para todos los casos de violación del derecho penal interno se obtendrá la individualización y sanción de sus autores*”.

En consecuencia, el Estado de Honduras rechaza la vulneración de los derechos contemplados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por las afirmaciones antes referidas.

V.-Reparaciones Integridad psíquica de los familiares.

Honorable Corte IDH, El Estado de Honduras discrepa con la posición presentada por las supuestas víctimas, en cuanto a la indemnización de los hermanos Concepción Pacheco,





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 16 de 19

Blanca Nubia Almendarez Pacheco, Santos Norma Pacheco, Yamileth Almendarez Pacheco, Jaqueline Almendarez Pacheco, Jorge Alberto Almendarez Pacheco, María Otilia Pacheco y Francisco Pacheco, misma que no podría ser, en razón de equidad y proporcionalidad, igual que en los casos de los hermanos Marleny, María Regina y José, tomando en consideración que las afectaciones a los demás hermanos no fueron en similares circunstancias, tomando en consideración los parámetros jurisprudenciales de esta Honorable Corte para determinar quién es víctima de una violación a la integridad psíquica y moral.

Todo esto resulta relevante en el caso *sub judice*, a fin de afirmar que los argumentos planteados en el ESAP presentado por los peticionarios, en cuanto a las medidas de reparación son desproporcionadas. El Estado de Honduras considera imperiosamente necesario resarcir e indemnizar a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y crear conciencia y una cultura de respeto en la población hondureña; sin embargo, las reparaciones deben ser acordes al caso concreto y la prueba presentada por las partes. El Estado confía plenamente que este honorable Tribunal decretará si resulta procedente una reparación económica acorde al caso en concreto conforme a los principios de equidad, proporcionalidad y justicia.

En relación a la reparación por el daño moral, el Estado tiene las consideraciones siguientes:

- Conforme a lo antes expuesto, el Estado reitera su posición en considerar que la afectación de los señores, Concepción, Blanca Nubia Almendarez, Santos, Norma, Yamileth Almendarez, Jaqueline Almendarez, Jorge Alberto Almendarez, María Otilia y Francisco todos de apellido Pacheco, no debe ser considerada igual a la de las personas que se encontraban dentro del núcleo íntimo del señor Pacheco León.
- De igual forma, consideramos que en el caso *sub judice* es importante tener en cuenta la realidad socioeconómica de nuestro país en relación al país de residencia





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 17 de 18

de algunos de las supuestas víctimas. Tal como se ha considerado, en el caso **Aloeboetoe y otros vs Surinam**, a fin de recabar y tener mayores insumos para poder determinar de manera más acertada la posible reparación económica en el presente caso.

VI.-Reparaciones en cuanto a los Derechos Políticos.

Honorable Corte IDH, disentimos rotundamente con la posición presentada por las supuestas víctimas, en cuanto a la indemnización por los salarios que el señor Ángel Pacheco León hubiera devengado como Diputado. El Estado considera, que no existen medios de prueba suficientes para tener por cierta la propuesta de reparación por daño material consistente en lucro cesante solicitada en el ESAP, ya que los únicos medios de prueba presentados (anexo 33 del ESAP) resultan insuficientes para determinar el salario de Ángel Pacheco. Pues no acreditan las respectivas declaraciones tributarias de los últimos años de vida del señor Pacheco, es decir, cuáles eran sus ingresos promedio.

En cuanto a los 20,000.00 lempiras referidos como salario de la víctima en el anexo 33 del ESAP, cabe mencionar que dicho monto no es acorde al que se muestra en dicha documentación. De igual manera, los peticionarios no acreditan con documentación de la antes llamada Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) entidad rectora de la Administración de Tributos, los ingresos del señor Pacheco León, o de la empresa IMPALE, lo cual hace imposible tener la suma planteada por los peticionarios como real al momento de establecer el daño material y en consecuencia en razones de equidad se debe tomar en consideración el salario mínimo vigente a partir de los hechos, tal como ha considerado la Corte en casos como *Cantoral Benavides vs Perú* y *Juan Humberto Sánchez vs Honduras*.

Tampoco resulta razonable solicitar una indemnización por los salarios dejados de percibir como Diputado del Congreso Nacional, cuando él no fue declarado electo y nunca desempeñó el cargo. Siguiendo una línea lógica de análisis no se puede solicitar la





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 18 de 19

restitución o indemnización de un derecho (el pago) que nunca recibió y menos aún derechos derivados de ese pago inexistente.

A su vez nos parece excesivo y contrario al principio de equidad pregonado por la Corte IDH y las características de las reparaciones (justa, oportuna, razonable y suficiente) hacer una solicitud de esta naturaleza, ya que su hermano José Pacheco fue electo Diputado, lo que significa que devengó el salario y los beneficios conforme a dicho cargo tal como se acredita de parte del Estado.

En ese sentido, se entiende que jurídicamente el Estado no está exento de la aplicación de aquellas medidas que buscan compensar los daños sufridos por los familiares cercanos de la víctima, conforme la equidad. Sin embargo, es importante, determinar el alcance y los términos de las medidas de reparación. Porque si bien las reparaciones a violaciones a derechos humanos deben ser integrales, esto no conlleva a que se deba dar una doble reparación por cada violación, es decir, a cada hecho ilícito corresponde una medida de reparación adecuada.

En consecuencia, la reparación solicitada excede los parámetros internacionales y, por tanto, resulta de igual forma improcedente solicitar el pago de la pensión de gobierno aducida en la pág. 86 del ESAP. En tal sentido, a la luz de estos antecedentes jurisprudenciales, de la plataforma fáctica del caso *sub judice* y de los argumentos presentados por esta representación solicitamos no se declare la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación al artículo 23 de la CADH y en consecuencia la Corte no se pronuncie sobre las reparaciones por la violación a este derecho y que el Estado de Honduras no sea condenado al pago de los salarios que el señor Ángel Pacheco León hubiera devengado como Diputado.





Procuraduría General de la República
Honduras

Tegucigalpa M.D.C.
24 de abril de 2017
Oficio DNC-DDHH-LI-46-2017
Página 19 de 19

VII.-Petitorio.

1. En los términos relacionados, que se tengan por presentados los Alegatos Finales Escritos del Estado de Honduras, en el Caso Ángel Pacheco León y Familia vs Honduras.
2. El Estado de Honduras solicita a la Corte que al momento de deliberar sus puntos resolutiveos, tomen en consideración los principios de justicia, equidad, proporcionalidad, y las reglas de la sana crítica para determinar la valoración probatoria y las eventuales reparaciones en el presente caso.
3. Respecto al peritaje propuesto por la Comisión, el Estado de Honduras solicita a la Corte que el modelo de investigación expuesto por el perito, no sea considerado para determinar la posible responsabilidad internacional, ya que, dicho modelo no era aplicable en el 2001, como quedo establecido en la audiencia de juicio al evacuarse el referido medio de prueba.
4. En consecuencia, de lo antes expuesto y de acuerdo con lo evacuado en la audiencia pública de juicio en fecha 23 de marzo de 2017, se declare la no responsabilidad del Estado de las violaciones a los Derechos consagrados en los artículos 1., 2, 4 (Derecho a la vida), 5 (Integridad personal), 8 (garantías judiciales), 23 (Derechos Políticos) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos en perjuicio de las presuntas víctimas, al momento de pronunciar la Sentencia de fondo en el presente caso.

Aprovecho la ocasión para expresarle y reafirmar la más alta voluntad del Estado de Honduras en cumplir con los mandatos de ese Honorable Tribunal.

ABG. RICARDO LARA WATSON
Sub Procurador General de la República
Agente del Estado

